

NOTA EDITORIAL

El desmantelamiento del sistema científico argentino: entre el ajuste fiscal y el “cientificidio”

Un adecuado financiamiento del sector de ciencia y tecnología es una condición indispensable para un desarrollo socioeconómico sostenible, para defender nuestra soberanía nacional y mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades. Durante décadas, Argentina construyó un sistema de educación pública y de ciencia y tecnología reconocido no sólo en la región, sino a nivel mundial, con una vasta red de universidades nacionales e instituciones como el CONICET, el INTA, el INTI, el INA entre muchas otras, que han sido semilleros de recursos humanos, innovación y democratización del conocimiento. Ese sistema, hoy, enfrenta una amenaza sin precedentes.

Desde diciembre de 2023, el sector atraviesa un proceso de desfinanciamiento sistemático. El crédito presupuestario destinado a ciencia y tecnología cayó un 32,9 % en 2024 y un 21,8 % adicional en 2025, acumulando una pérdida real de casi la mitad de los recursos en apenas dos años. La contracción no solo paraliza proyectos en curso y vacía organismos estratégicos, sino que compromete seriamente la capacidad del país para responder a desafíos globales como el cambio climático, las pandemias, la transición energética o la producción agroalimentaria, entre otros.

En las universidades nacionales, donde se concentra más del 80 % de la investigación científica, el deterioro real supera el 60 %. A esto se suma el reciente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que buscaba otorgar un respiro frente a la crisis. Sin embargo, el 17 de septiembre en el marco de una Masiva Marcha Federal Universitaria, la Honorable Cámara de Diputados de la Nación rechazó ese veto, junto con el de la Ley de Emergencia en Pediatría. Ahora ambas decisiones deberán ser ratificadas por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación. Este hecho demuestra que la sociedad argentina continúa con una firme defensa del sistema universitario y que existen diferentes sectores políticos dispuestos a frenar el desmantelamiento de la educación superior y de la salud pública, aunque la incertidumbre sobre su ratificación definitiva mantiene en vilo a universidades e instituciones científicas en todo el país.

Mientras tanto, en el CONICET, la situación sigue agravándose, el ingreso a la Carrera del Investigador Científico se encuentra congelado, los seleccionados en la convocatoria 2022 continúan sin ser designados y las becas doctorales y posdoctorales se han visto recortadas y demoradas. Los resultados del concurso 2023 confirmaron el vaciamiento: de los 845 ingresos prometidos, solo se efectivizaron 400. Es decir, 445 jóvenes investigadores quedaron excluidos, mientras que la convocatoria 2024 directamente no se abrió. Es decir, Argentina ha invertido durante años en su formación y luego los expulsa, en el momento exacto en que deberían consolidar sus carreras, forzándolos a abandonar su vocación científica o a emigrar.

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i) sufre un vaciamiento similar: su financiamiento se redujo en más de un 90 % y sus programas están paralizados. El Decreto 447/2025 modificó su gobernanza, concentrando las decisiones en un directorio reducido y designado por el Poder Ejecutivo. Se desmanteló así un organismo plural y federal, institucionalizando la discrecionalidad, vetando voces críticas y debilitando la planificación estratégica basada en criterios científicos.

El incumplimiento deliberado de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología confirma este patrón. El gobierno ha declarado que no aplicará la norma porque no prevé sanciones, lo que erosiona el principio de legalidad y vacía de contenido una política de Estado votada por el Congreso. El presupuesto 2025 asigna apenas el 0,157 % del PBI a la función Ciencia y Técnica, frente al 0,302 % de 2023, en un retroceso que coloca al país en niveles de inversión de principios de siglo.

Las consecuencias son profundas: desarticulación de redes institucionales, pérdida irreparable de talento joven y ruptura generacional en la investigación. Formar un investigador/a requiere más de una década de inversión; expulsarlo/a del sistema puede consumarse en semanas. Se pierde así capital humano estratégico en áreas vitales como energía, salud, agroindustria o tecnología.

Frente a este panorama, la comunidad científica ha reaccionado con firmeza. La Junta de Calificación y Promoción del CONICET denunció la parálisis institucional, mientras el Directorio del organismo y redes de institutos elevaron reclamos y acciones judiciales. La histórica marcha universitaria del 23 de abril de 2024, con más de un millón de personas en las calles, expresó el rechazo social al vaciamiento de la ciencia y la educación pública. Desde la Universidad de Buenos Aires (UBA) se ha manifestado un firme compromiso con el sostenimiento de las actividades de I+D+i. Ello se refleja en la continuidad de convocatorias a becas, proyectos de investigación, estancias en el exterior, organización de reuniones científicas y en el financiamiento tanto de los institutos propios como de aquellos de doble dependencia junto al CONICET. A su vez, se han puesto en marcha nuevas líneas de apoyo, como por ejemplo los Proyectos de Investigación y Desarrollo en Áreas Estratégicas con Impacto Social y el Programa de Mantenimiento y Puesta en Valor de Equipos para Investigación. No obstante, este enorme esfuerzo institucional resulta insuficiente frente a las necesidades estructurales que deberían ser atendidas mediante políticas públicas de financiamiento sostenidas por el Estado nacional.

El término “*cientificidio*”, acuñado en este contexto, no es una exageración. Describe con precisión la destrucción sistemática de las condiciones materiales, institucionales y humanas que hacen posible la producción científica en Argentina. El vaciamiento del sistema no solo priva al país de conocimiento, sino que hipotecará su capacidad de desarrollo durante las próximas décadas.

El deterioro se extiende al sistema de salud. Los Hospitales de la Universidad de Buenos Aires son ejemplo de ello, se ha manifestado esta situación, no sólo a través del Consejo Superior de la UBA sino con diferentes acciones de visibilización en el Hospital de Clínicas José de San Martín, en el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo” y también, en el caso de la salud animal, en nuestro Hospital Escuela de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Por otra parte, la situación del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan” es paradigmática: la reducción de fondos al sistema de residencias médicas amenaza la continuidad de la formación de especialistas, comprometiendo tanto la calidad de la atención sanitaria como la formación de profesionales de excelencia. Debilitar un centro de referencia como lo es esa institución, símbolo del compromiso argentino con la salud infantil, constituye un mensaje inequívoco del rumbo destructivo que atraviesa el sector.

Desfinanciar la ciencia y la educación superior no es un mero ajuste técnico. Es una decisión política que debilita la democracia, compromete la soberanía y posterga indefinidamente el futuro de la nación. Argentina ha demostrado que puede construir un sistema científico de calidad internacional, federal y comprometido con las necesidades sociales. Pero esa construcción no es indestructible. Si no se frena el rumbo actual, lo que se está destruyendo en meses tardará generaciones en recuperarse.

Hoy más que nunca es urgente defender la ciencia, la salud y la universidad pública como bienes estratégicos. Su desmantelamiento no solo amenaza a la comunidad académica, sino al conjunto de la sociedad, que necesita del conocimiento para asegurar un futuro más justo, soberano y sustentable.

Dr. Alejo L. Pérez Carrera
Director InVet

Dr. Daniel M. Lombardo
Editor Ejecutivo InVet